



OJ – 00919 - 25

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2025

Doctor

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA

Secretario Jurídico Distrital

correspondencia@secretariajuridica.gov.co

Carrera 8 No. 10 - 65 - Bogotá D. C.

ASUNTO: Pronunciamiento y análisis de la Directiva 002 de 2025 - Lineamientos para la planificación, implementación y seguimiento de la agenda regulatoria. Radicado SJD No. 2-2025-7075

Cordial saludo.

Por medio de la presente, respetuosamente nos dirigimos a su despacho con el fin de manifestar que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, procedió a la revisión de la Directiva 002 del 24 de junio de 2025. En virtud de lo anterior, una vez analizado el documento, se realizan las siguientes precisiones:

1. Consideraciones Preliminares.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una Institución de Educación Superior creada por el Acuerdo 10 de 1948 del Consejo de Bogotá, que, conforme al artículo 69 constitucional, goza de autonomía, de suerte que “(podrá) darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Según lo anterior, la Ley 30 de 1992 consagra en su artículo 57 que “*las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo*”.

2. Marco Normativo Constitucional.

La Carta Política de 1991 establece lo siguiente sobre las universidades como entes autónomos:

“ARTÍCULO 69. *Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.*

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo (...)”.

Ahora bien, con base en lo expuesto en su consulta, es pertinente mencionar lo establecido en la Ley 30 de 1992¹:

“ARTÍCULO 28. *La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar*



sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional.

(...)

ARTÍCULO 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.

Jurisprudencia Vigencia

<Inciso modificado por el artículo 1 de la ley 647 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley”.

3. Jurisprudencia.

La Corte Constitucional en la sentencia C-346 de 2021 explicó sobre la autonomía universitaria:

“(…) la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que la autonomía universitaria implica el ejercicio de dos tipos de libertades constitucionales que garantizan su independencia de poderes externos y la no interferencia del Estado en el cumplimiento de su misión institucional: autodirigirse («designar sus directivas») y autoregularse («regirse por sus propios estatutos»). Igualmente, ha sostenido que dicha garantía constitucional se proyecta, a su vez, en tres ámbitos distintos: el académico, el administrativo y el presupuestal. En el ámbito académico, las universidades tienen el derecho a determinar su orientación filosófica e ideológica, para lo cual «cuenta[n] con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación». En el ámbito administrativo, tienen la facultad de decidir su organización interna y su funcionamiento, de acuerdo con la ley. Finalmente, en el ámbito presupuestal, la autonomía reside en la prerrogativa que tienen las universidades «de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad».

(...)

El Legislador debe disponer de un régimen jurídico especial para las universidades que sea compatible con la autonomía conferida por la Constitución. De otro lado, son contrarias a la Constitución las medidas legislativas que sujeten a las universidades públicas a la tutela administrativa o presupuestal del Ejecutivo. En este sentido, deben evitarse normas que formalmente o en la práctica impliquen que las universidades estatales sean tratadas como



dependientes de otras instituciones o entidades”.

4. Conceptos sobre la autonomía universitaria.

La Universidad Francisco José de Caldas es un órgano autónomo e independiente por mandato constitucional, como bien se explica en el Concepto 32131 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, según el cual:

“En consecuencia, si bien las universidades públicas, como entes autónomos, hacen parte de la estructura del Estado, no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar parte de la administración nacional. Su organización tiene un régimen particular y especial, y por ello, estos organismos están vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo, vinculación que no significa que el Ministerio ejerza sobre ellas un control de tutela, sino que deben estar sujetos a su orientación y coordinación.

(...)

“Si bien es cierto los entes universitarios autónomos comparten varias de las características de las entidades descentralizadas del orden nacional, tales como personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente- art. 57 ley 30 de 1992 -, no es menos cierto que difieren en otras, como no estar sujetas al control de tutela, el proceso de creación - arts. 210 de la Carta, 58 y 59 de la ley 30 -, la configuración del régimen laboral, amen que, por no pertenecer a la rama ejecutiva del poder público, sino constituir órganos autónomos e independientes por mandato constitucional, no resulta dable asignarles el carácter de entidades descentralizadas, concepto que está restringido a personas jurídicas que integran la rama ejecutiva del poder público (...).”

5. Marco Normativo Distrital.

De otra parte, al revisar el artículo 38 del Decreto Distrital 479 de 2024 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica”*, se encuentra lo siguiente:

*“Artículo 38. **Ámbito de aplicación.** Las disposiciones establecidas en el presente decreto son aplicables a todas las entidades y organismos distritales.*

***Parágrafo 1.** La Contraloría de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Universidad Distrital, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la Empresa de Energía de Bogotá; la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica Invest in Bogotá, Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, Capital Salud EPS, La Terminal de Transporte S.A.; Entidad de Gestión Administrativa y Técnica -EGAT, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS, Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas - BogotáBio S.A. podrán establecer esquemas jurídicos propios en el marco de su autonomía, no estando obligados a seguir los formatos, guías y modelos y políticas propuestos por la Secretaría Jurídica Distrital”* (negrilla fuera del texto).

Directiva 002 del 24 de junio de 2025:



“El artículo 60 del Decreto Distrital 479 de 2024 (Único Distrital del Sector Gestión Jurídica) adopta la Política de Gobernanza Regulatoria con el propósito de “(...) promover el uso de herramientas jurídicas y técnicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias en las entidades y organismos distritales”.

En atención a lo anterior, el artículo 65 del decreto en referencia establece el Ciclo de gobernanza regulatoria, entendido como las diferentes etapas por las que debe pasar un proyecto normativo antes de ser expedido. En detalle, las fases de: (i) planeación; (ii) diseño de la regulación; (iii) consulta pública de los proyectos de actos administrativos; (iv) revisión de calidad normativa; (v) publicación de la regulación y (vi) evaluación.

Dentro de la etapa de planeación, el artículo 67 establece la Agenda Regulatoria como herramienta de planeación fundamental. Con esta, las entidades y organismos distritales deben incorporar los proyectos de actos administrativos que se pretenden expedir en el año, para el conocimiento y participación de la ciudadanía y de los actores de interés.

En consecuencia, la Agenda Regulatoria es un instrumento que permite organizar y priorizar las regulaciones a cargo de los diferentes sectores, evitando improvisación, duplicidad y vacíos regulatorios; igualmente refleja el compromiso del Distrito Capital con la planificación, la transparencia, la participación y la mejora continua de su proceso regulatorio.

(...)

2.1. Mecanismos para la articulación con las dependencias de la entidad e intersectorial para la construcción de la Agenda Preliminar.

Es necesario que dentro de la construcción de la Agenda Regulatoria se generen canales de comunicación efectivos que permitan definir los objetivos y responsabilidades con claridad. Se deberá propender por el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la información y el trabajo colaborativo entre las dependencias.

En consecuencia, se recomienda a las entidades y organismos del Distrito Capital que, dentro del plan institucional de la entidad, incorporen la agenda regulatoria como un tema de interés y en consecuencia lo formulen como una de las tareas de los comités intersectoriales de coordinación jurídica de cada sector”.

(...)

2.5. Consulta sectorial.

Cada secretaría cabeza de sector deberá indagar con las entidades adscritas o vinculadas sobre los proyectos normativos que pretendan expedir para la regulación de alguna materia determinada, con el fin de incluirlos en la respectiva agenda del sector (Subrayas fuera de texto)



En los eventos que se trate de proyectos de actos administrativos de firma del/la alcalde/sa mayor, la secretaría cabeza de sector deberá aprobar su inclusión en la Agenda Preliminar antes de su publicación”.

Decreto 310 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito”

“Artículo 1°. Denominación y Naturaleza Jurídica. La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera.

Artículo 2°. Objeto. La Secretaría de Educación del Distrito como organismo del Sector Central y cabeza del sector educativo, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.”

Artículo 3°. Funciones. Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito ejercer, de conformidad con el Decreto Ley [1421](#) de 1993, el Acuerdo [257](#) de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, las siguientes funciones:

A. Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo [257](#) de 2006 y las demás normas legales del orden nacional.

B. Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

C. Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio educativo en la ciudad.

D. Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación”.

ACUERDO 001 DEL 2018 “Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Educación del Distrito Capital”:

“Artículo 3°. Funciones. El Comité intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Educación ejercerá las siguientes funciones, de conformidad con el artículo [11](#) del Decreto Distrital 137 de 2017 y las demás que lo complementen, modifiquen o reglamenten:

1. Determinar los asuntos jurídicos de impacto para el sector educativo.
2. Analizar y decidir respecto de asuntos que tengan alto impacto en el sector educativo.
3. Informar al sector administrativo educativo las decisiones adoptadas por el Comité Jurídico Distrital, a través del presidente del comité.



4. *Velar porque se apliquen las políticas y lineamientos que en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro, se dicten para el Distrito Capital.*

5. *Presentar informes periódicos de la aplicabilidad y cumplimiento, de las políticas y lineamientos jurídicos, impartidos por el Comité Jurídico Distrital, por el Comité de Apoyo a la Contratación y/o por la Secretaria Jurídica Distrital.*

6. *Analizar los temas de impacto jurídico del sector educativo y unificar una posición, para ser presentada y discutida en el Comité Jurídico Distrital, de ser el caso”.*

6. Marco Normativo Institucional.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de sus competencia y autonomía universitaria expidió el Acuerdo 004 del 5 de mayo de 2025 “Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, estatuto en el cual se determinó lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Naturaleza Jurídica y Carácter Académico. *La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un ente autónomo, perteneciente al sector educativo del Distrito Capital, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.”*

(...)

ARTÍCULO 5. Principios Generales. *Los siguientes principios defienden el cumplimiento del Estado Social de Derecho, constituyen las bases filosóficas y los pilares fundamentales que sustentan el ejercicio universitario. Así mismo, la plataforma ética y moral en la que se sustentan las demás acciones, amparan a toda la comunidad diversa que integra la Universidad (incluyendo todos sus estamentos y modos de vinculación) y definen, además, la relación de la Institución con su contexto social y el compromiso ético frente a las comunidades vulneradas que tengan condiciones de género, etnia o clase.*

a) **Defensa y Construcción de lo Público.** *La Universidad se compromete con la defensa y el fortalecimiento de lo público y, de esta manera, asume la educación superior como un derecho y un bien público, que debe ser garantizado y financiado por el Estado, en los términos de la Constitución Política y de la Ley. La defensa de lo público implica que quienes están vinculados a la Universidad deberán adelantar actuaciones éticas, transparentes y que correspondan con los principios, objetivos, misión y funciones universitarias, en la búsqueda de una educación para la vida con dignidad y el buen vivir.*

b) **Autonomía Universitaria.** *En el marco de la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia, la autonomía es un principio que ejerce la Universidad a través de procesos de autorregulación y autogobierno, en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa indispensables para el cumplimiento de su misión.*



La autonomía universitaria es, además, una manifestación del carácter democrático, participativo y pluralista, orientada hacia el desarrollo integral de los miembros de la Comunidad en un ambiente en el que imperen las libertades de pensamiento, enseñanza, aprendizaje, cátedra, investigación-creación e innovación y proyección social”.

7. Análisis Jurídico.

Verificada la normatividad Constitucional y Legal, en efecto la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un **ente universitario autónomo**, con régimen especial, en los términos de los artículos 28 y 57 de la Ley 30 de 2001¹, conforme a los cuales ha proferido sus propios estatutos, así como ha establecido su propia organización y su propio régimen de contratación, entre otros aspectos.

Ahora bien, el *régimen especial* de las universidades estatales u oficiales consiste, en palabras de la Corte Constitucional en sentencia C-547 de 1994, en que: “(...) *el constituyente autoriza a la ley para crear un ‘régimen especial’ para las universidades del Estado, lo que significa que estas instituciones se regularán por normas especiales que pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras entidades de educación superior, públicas y privadas, o a las demás entidades estatales, siempre y cuando con ellas no se vulnere su autonomía*”.

Profundizando en el tema, el tribunal constitucional explicó en la sentencia C-220 de 1997: “*Las universidades del Estado, son instituciones que para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político, en consecuencia no pueden entenderse como parte integrante de la administración, o como organismos supeditados al poder ejecutivo, ellas deben actuar con independencia del mismo*”.

8. Conclusión.

Conforme al análisis efectuado, este despacho considera que la aplicación de la Directiva 002 de 2025 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de **carácter facultativo** y por ende no obligatorio, al tenor literal de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Distrital 479 de 2024. A su turno, se considera que la entidad con la cual se podrá realizar una mejor articulación y desarrollo de la agenda regulatoria en materia de política educativa y actualización normativa Distrital en el marco del Plan de Desarrollo, es la Secretaría Distrital de Educación. Está última lidera los comités interinstitucionales del sector educación de los cuales la Universidad Distrital hace parte como invitada. Por tal motivo, se considera que la entidad idónea para adelantar lo dispuesto por la Secretaría Jurídica Distrital es Secretaría Distrital de Educación la cual materializaría e incorporaría de manera calificada la Agenda Regulatoria de que trata la Directiva 002 de 2025.

En esta misma línea, se debe mencionar que la Universidad Francisco José de Caldas cuenta con los aplicativos de consulta normativa propios como SISGRAL Sistema de Información de la Secretaría General <https://sgral.udistrital.edu.co>, página web <https://www.udistrital.edu.co>, SIGUD Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, El SIGA-UD que es el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas normograma y demás aplicativos de consulta, los cuales dan cumplimiento al principio de

¹ Que modificó el inciso 3º del citado artículo 57 de la Ley 30 de 1992



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Oficina Asesora Jurídica

publicidad de los actos administrativos, expedidos en el marco de la competencia institucional atribuida a la Universidad Francisco José de Caldas. Se resalta que la Secretaría Jurídica Distrital podrá apoyarse en los aplicativos de consulta ídem, con el objeto de alimentar la compilación de normatividad, doctrina y jurisprudencia del Régimen Legal de Bogotá D.C.

Finalmente, este despacho manifiesta que la Universidad Francisco José de Caldas estará siempre presta a brindar toda su colaboración en el marco de su competencia institucional.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones normativas de orden Legal y Constitucional que se presenten a futuro que sean aplicables a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Atentamente,


JAIME ANDRÉS RIASCOS IBARRA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Manuel Alejandro Zarate Suárez -Profesional Especializado. CPS. - OAJ	